

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
CENTRO JUDICIAL MONTEROS
DEFENSORIA OFICIAL CIVIL Y DEL TRABAJO DE LA 1° NOMINACIÓN
ACTUACIONES N°: 2380/23
H3010367301
H3010367301

OBJETO: ME APERSONO. CONSTITUYO DOMICILIO PROCESAL. SOLICITO BENEFICIO PARA LITIGAR SIN GASTOS. PLANTEO NULIDAD. OFREZCO PRUEBA

SRA JUEZA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES ÚNICA NOM. (CJM)

JUICIO: "ROMANO RAMON ANTONIO C/ ROMERO WALTER FABIAN S/ AMPARO A LA SIMPLE TENENCIA". EXPTE. N° 276/23

Dr. GUSTAVO PALIZA, Defensor Oficial Civil y del Trabajo del Centro Judicial Monteros, constituyendo domicilio a todos los efectos procesales en mi Público Despacho y en casillero digital N° 307162716481511, ante la Sra. Jueza me presento y respetuosamente digo:

I.- PERSONERÍA

Me apersono en nombre y representación de Sr. Walter Fabián Romero, argentino, mayor de edad, DNI: N° 29.836.025, con domicilio real en Manuela Pedraza, Depto. Simoca, teléfono celular N° 3816271207, quien lo constituye a los efectos legales en mi Público Despacho y en casillero digital N° 307162716481511. Pido se tenga presente.

Adjunto Declaración Jurada suscripta por mi conferente y protocolizada por el Actuario de este Ministerio, Constancia de ANSES e Informes previstos en el art. 79, 80 y concordantes del NCPCT.

Solicito que, previa vista a la Sra. Fiscal Civil, se conceda el Beneficio para Litigar Sin Gastos a favor de mi mandante y en el carácter

invocado, se me otorgue la correspondiente intervención de ley y la representación provisional prevista en los arts. 83 y 84 del NCPCCT.

II.- OBJETO

En legal tiempo y forma promuevo formal **INCIDENTE DE NULIDAD**, en los términos de los arts. 221, 222 inc. 1, 223 y concordantes del CPCCT, solicitando que se deje sin efecto la **sentencia de fecha 30/04/2024**, que reza: *“I) HACER LUGAR, AL AMPARO A LA SIMPLE TENENCIA, formulado por el señor Ramón Antonio Romano, DNI N° 8.061.273 en contra de Walter Fabián Romero DNI N° 29 836.025, sobre el lote de medias aproximadas de 60m de frente y contra frente por 200m de lados, sito en la localidad de Manuela Pedraza. Ubicado entre. Elvira Romano (al Norte), Jordán Ocaranza (al Este) Emiliano Leiva (al Este) y calle publica al Oeste del Departamento Simoca, Tucumán. II) ORDENAR, al demandado y a todo otro ocupante, dejar el inmueble libre de toda persona o cosa en un plazo de 48 horas de notificado, de quedar firme la presente resolución lo que en su oportunidad se hará saber- Por haber quedado demostrado que quien tenía el objeto de estas actuaciones, era el señor Ramón Antonio Romano. No así el demandado en autos. Vencido el plazo, si la demandada no cumpliera con lo dispuesto, sin necesidad de nueva orden, se procederá a su lanzamiento poniendo en posesión del inmueble al tenedor legítimo del caso. Facultando el uso de la fuerza pública y allanamiento de la propiedad en caso de resultar necesario...”* por un lado, por **alteración de la estructura esencial del procedimiento, al admitir extemporáneamente documentación (situación señalada al momento de realizarse la correspondiente inspección ocular); por valorar únicamente prueba contraria a la posición de mi asistido, omitiendo la consideración de otras que dan cuenta de la realidad de los hechos en el presente caso; así como otras graves falencias procedimentales señaladas en esta presentación;**

además, especialmente, por incurrir al momento de fundamentar su decisión, en arbitrariedad manifiesta, susceptible de descalificar por sí misma, el acto jurisdiccional (arbitrariedad en el razonamiento legal), a través de una interpretación subjetiva de los hechos, violentando el deber de imparcialidad; requiriendo por todo ello, que se declare **NULO DE NULIDAD ABSOLUTA** el acto jurisdiccional emitido por el Sr. Juez de Paz de Simoca, de conformidad con los argumentos que se detallan infra.

III.- LOS ARGUMENTOS DEL PLANTEO DE NULIDAD

1.- Los requisitos para la procedencia de la nulidad incoada.

Del juego de las normas aplicables en materia de nulidades procesales, surgen los requisitos para su procedencia, a saber:

a.- El planteo de nulidad, trata **la alteración de la estructura esencial de proceso, lo cual afecta el orden público** (art. 386 del CCyCN: “Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres...” y, por lo tanto, resulta **insubsanable** (art. 387 del CCyCN: “La nulidad absoluta puede declararse por el juez, aun sin mediar petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción”), es decir, que **puede plantearse en cualquier momento y estado de la causa.**

Además, tal como se desarrollará infra, se incurrió en arbitrariedad manifiesta, susceptible de descalificar por sí misma, el acto jurisdiccional (arbitrariedad en el razonamiento legal), a través de una interpretación subjetiva de los hechos, violentando el deber de imparcialidad, lo cual no es susceptible de

ser convalidado o subsanado.

b.- En efecto, existe en primer lugar, una evidente inobservancia de formas, en cuanto, se admitió extemporáneamente documentación (situación señalada al momento de realizarse la correspondiente inspección ocular) y se valoró únicamente prueba contraria a la posición de mi asistido, omitiendo la consideración de otras que dan cuenta de la realidad de los hechos en el presente caso. Por lo demás, se resolvió el fondo de la cuestión, sin resolver la incidencia previa, lo cual resulta inadmisibile.

Por su parte, de los considerandos de la resolución, surge una clara arbitrariedad en el razonamiento judicial para arribar a la decisión adoptada, puesto que se basa en meras consideraciones subjetivas, que no surgen de los elementos probatorios aportados en autos, sino de las propias ideas y prejuicios de quien emitió la resolución, lo que lo descalifican como acto jurisdiccional válido.

La gravedad de los vicios señalados, tiene como consecuencia la nulidad de la decisión jurisdiccional emanada del Sr. Juez de Paz de Simoca, puesto que implica una violación evidente del derecho de defensa de mi asistido y del principio de imparcialidad al momento de resolver la causa.

c.- El presente planteo es promovido por parte interesada (a pesar que las nulidades absolutas, por alteración esencial del proceso, pueden ser dictadas de oficio), con un evidente interés en la declaración de nulidad, señalando la causa y el perjuicio concreto sufrido, así como las defensas que ha dejado de oponer mi mandante, como consecuencia de la aplicación de un procedimiento viciado.

d.- Esta parte, no ha dado lugar o ha provocado la nulidad del acto, ni se alega la propia torpeza al fundamentar el presente planteo.

e.- El acto no ha cumplido la finalidad prevista por la norma, siendo necesario sanear el mismo, para evitar la afectación del derecho de defensa de la parte que represento.

2.- La sentencia recurrida y sus fundamentos

Como se adelantó, mediante sentencia de fecha 30/04/2024, el Sr. Juez de Paz de Simoca dispuso: *“I) HACER LUGAR, AL AMPARO A LA SIMPLE TENENCIA, formulado por el señor Ramón Antonio Romano, DNI N° 8.061.273 en contra de Walter Fabián Romero DNI N° 29 836.025, sobre el lote de medias aproximadas de 60m de frente y contra frente por 200m de lados, sito en la localidad de Manuela Pedraza. Ubicado entre. Elvira Romano (al Norte), Jordán Ocaranza (al Este) Emiliano Leiva (al Este) y calle publica al Oeste del Departamento Simoca, Tucumán. II) ORDENAR, al demandado y a todo otro ocupante, dejar el inmueble libre de toda persona o cosa en un plazo de 48 horas de notificado, de quedar firme la presente resolución lo que en su oportunidad se hará saber. Por haber quedado demostrado que quien tenía el objeto de estas actuaciones, era el señor Ramón Antonio Romano. No así el demandado en autos. Vencido el plazo, si la demandada no cumpliera con lo dispuesto, sin necesidad de nueva orden, se procederá a su lanzamiento poniendo en posesión del inmueble al tenedor legítimo del caso. Facultando el uso de la fuerza pública y allanamiento de la propiedad en caso de resultar necesario...”*

A los fines de arribar a dicha conclusión, el Sr. Juez de Paz argumentó que ha quedado demostrado en autos, que la tenencia del inmueble recaía en el Sr. Ramón Antonio Romano y no en cabeza de Walter Fabián Romero.

La línea argumental del juzgador, se observa en los considerandos, los cuales transcribo para una mejor comprensión: *“Que atento el Art 40 de la Ley 4815, primeramente, se notificó a las partes de las actuaciones a llevarse a cabo por este Juzgado de Paz.*

Que, se realizaron: Inspección ocular y Croquis, a fs. 57 y 58 respectivamente. Que, de la inspección ocular a entender del suscripto, surge acabadamente el lote recientemente (a la fecha de inspección) estuvo sembrado con caña de azúcar. El rastrojo existente en gran cantidad evidenciaba un anterior cultivo de caña de azúcar. Considero, el rastrojo disperso sobre todo el suelo del lote objeto no correspondía a un cultivo de hace unos cuatro o más años atrás, según expresión de Walter Fabián Romero en foja 6. Conforme averiguación formulada a un cañero, cuando verdaderamente se cambia de cultivo el nuevo tratamiento del suelo, retira todo lo anterior, sino saldrían plantas diversas y entreveradas. Por lo visto, tampoco, creo desarrollaran tareas en un cañaveral atravesando con diversas maquinarias al lote en cuestión, desde casa de Walter Fabián Romero. Si es así, sería con tránsito absurdo y dificultoso, ya que se observaron algunos obstáculos como pueden verse en fotografías a fs. 74/75 ¿No es más fácil ingresar al lote por su frente solo destrabando un alambrado, como me comentó el señor Ramón Romano, él lo hacía? A los fines de estas consideraciones, obsérvense plantas entre ambos lotes en fotos agregadas a en donde se evidencia un suelo no pisado recurrentemente. No hay huella entre los lotes (casa de Walter Romero y lote objeto).

Que, cabe mencionarse la Inspección ocular, en muchos casos podría ser la única prueba, ya que no siempre se cuenta con vecinos testigos. O como en este caso, que, extrañamente los muchos vecinos intentados consultar, no quisieron aportar datos ¿Por qué? ¡Nos extrañó! Llamó nuestra atención.

Que, volviendo unos días atrás, posterior al 8/11/2023 (fecha de denuncia y solicitud de amparo), el 15/11/2023, nuevamente recurrió Walter Fabián Romero, pero esta vez en compañía de su señora madre. En esa segunda oportunidad y en conversación con ambos, me hicieron pensar a que en la primera conversación mantenida con Walter se había tergiversado la verdad. La verdad, y dicha de una forma era que Ramón Antonio Romano, es persona con buen pasar económico. "Él puede prescindir del bien". El denunciado en autos y

su madre, indudablemente piensan que es más justo el lote en cuestión quede en manos del más vulnerable o necesitado. ¿Conjeturo? Tal vez. A decir verdad, no puedo dejar de sospechar una verdad de hechos conforme a la entrevista mantenida en la segunda ocasión.

Que, en el espíritu de esta ley, lo más importante no es el bien. No es lo que prima, ya que sobre lo material queda la judicialización, si es interés de las partes, sino velar por la paz social. Evitar la confrontación sin ninguna Intervención ajustada a derecho o, de razón.

Que, los únicos testigos encontrados y con disposición a informar Ivana Robledo, Javier Orellana y Ubaldo Jesús Racedo, todos son coincidentes en informar que el lote en cuestión estaba en poder de Ramón Romano. Que, nunca lo tuvo Walter Fabián Romero”.

Sin embargo, del análisis de la presente causa, se observan graves vicios en la tramitación de la misma, así como en los argumentos sentenciales, primero, al no permitir el acceso a la jurisdicción de mi asistido, quien fue el primero que recurrió a la Justicia de Paz para la solución del conflicto; en la tramitación y apreciación de la prueba, al admitir extemporáneamente prueba documental, así como al considerar únicamente los testimonios favorables a la posición del actor; y sobre todo, al realizar una fundamentación o razonamiento de la decisión evidentemente arbitrario, basado en preconceptos y opiniones subjetivas que no resultan admisibles en un acto jurisdiccional, violentando de esta manera el deber de imparcialidad que sobre el mismo pesa.

3.- La alteración de la estructura esencial del procedimiento como causal de nulidad

Tal como he señalado, del análisis de las constancias de autos, se observa en la tramitación de la causa, una clara alteración de la estructura esencial del procedimiento, lo cual afecta el orden público, lo que torna el acto resolutivo, en nulo de nulidad absoluta y, por lo tanto, insubsanable.

a.- En primer lugar, existe falta de congruencia en la resolución atacada, en la referido a la identificación precisa del inmueble.

En este sentido, se estableció en los resulta: *“Que, el 08/11/2023 el señor Ramón Antonio Romano, D.N.I N° 8.061 27341.694.267, recurre por ante este juzgado de paz, solicitando amparo a la simple tenencia sobre una propiedad (de 40m de frente, por 56,79 de contra frente, y de 150m x 200m de lados Norte y Sur respectivamente. Colindantes: lado Norte Nora Elvira Romano, al Sur Jordán Ocaranza; Este: Emiliano Leiva y calle pública al Oeste, sita en la localidad de Manuela Pedraza, de esta jurisdicción)”*.

Sin embargo, en la parte resolutive, se describe de manera diferente el inmueble objeto del litigio: *“HACER LUGAR, AL AMPARO A LA SIMPLE TENENCIA, formulado por el señor Ramón Antonio Romano, DNI N° 8.061.273 en contra de Walter Fabián Romero DNI N° 29 836.025, sobre el lote de medias aproximadas de 60m de frente y contra frente por 200m de lados, sito en la localidad de Manuela Pedraza. Ubicado entre. Elvira Romano (al Norte), Jordán Ocaranza (al Este) Emiliano Leiva (al Este) y calle publica al Oeste del Departamento Simoca, Tucumán”*

Se observa una notoria diferencia, entre el terreno sobre el cual reclamó el Sr. Romano (40m de frente, por 56,79 de contra frente, y de 150m x 200m de lados Norte y Sur respectivamente), frente al que finalmente se hizo lugar a la acción (60m de frente y contra frente por 200m de lados), es decir, que se hizo lugar al amparo a la simple tenencia, por un terreno de mayor superficie que el reclamado (*fallo extra petita*).

En cuando a la ubicación, resulta confusa por falta de precisión, en cuanto el terreno reclamado, colindaba al lado norte con Nora Elvira Romano; al sur con Jordán Ocaranza; al este con Emiliano Leiva y al oeste con calle pública de Manuela Pedraza, según lo solicitado por el actor, mientras que el terreno sobre el cual finalmente se hizo lugar la acción, colinda al norte con Elvira Romano; al este, con Jordán Ocaranza (no al sur como en el reclamo efectuado por el actor); al este con Emiliano Leiva y al oeste con calle publica al Oeste.

Más allá de lo que podrían ser errores de tipeo, lo cierto que las diferencias de superficie señaladas y la falta de identificación correcta del inmueble, en su conjunto, implican una falta de congruencia entre lo petitionado y lo resuelto, lo que no puede dejar de señalarse.

La CSJN ha señalado que el principio de congruencia, exige una correspondencia precisa entre la sentencia y las pretensiones y defensas planteadas en el juicio, es decir, debe haber una adecuación entre el contenido de las demandas y las oposiciones de las partes y la respuesta emitida por el órgano jurisdiccional en su fallo (Fallos: 336:2429). El Alto Tribunal, sostiene que el principio de congruencia tiene carácter constitucional, porque refleja los derechos de defensa en juicio y de propiedad, y su fundamento radica en que el sistema de garantías constitucionales del proceso está diseñado para proteger los derechos, no para perjudicarlos.

En este contexto, es esencial que la justicia se base en la certeza y la seguridad, lo cual se logra con una decisión conforme a la ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales sin priorizar la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que en las formas también se realizan las esencias (Fallos: 315:106; 329:5903; 338:552 y CSJ 001460/2016/CS001 "Milantic Trans S.A. c/ Ministerio de la Producción", sentencia del 05/08/2021).

Asimismo, la Corte ha afirmado que un pronunciamiento judicial que desconoce o concede derechos no debatidos en la causa es incompatible con las garantías de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 284:115), ya que el juez no puede interpretar la voluntad implícita de una de las partes sin alterar el equilibrio procesal de los litigantes en perjuicio de la parte contraria (Fallos: 283:213; 311:569 y 344:1002 del 6/5/2021).

En resumen, el principio de congruencia se relaciona con la garantía de defensa en juicio, pues un fallo que desconoce o concede derechos no discutidos es incompatible con las garantías constitucionales, ya que el juez no puede convertirse en la voluntad implícita de una de las partes, alterando así el

equilibrio procesal en detrimento de la otra (Fallos: 310:2709; 327:1607). La sentencia civil no puede exceder las pretensiones (Fallos: 252:13) ni las defensas planteadas por las partes (Fallos: 256:504).

b.- En segundo lugar, debo referirme a la falta de acceso a la justicia por parte de mi asistido, quien primeramente recurrió al órgano jurisdiccional en busca de amparo a su tenencia. Sin embargo, tal vía procedimental le fue denegada, convirtiéndose de denunciante en denunciado, inmediatamente después.

Esto circunstancias se encuentra consignada en los resulta de la resolución: *“Que, previamente al 08/04/2023, fecha de denuncia y solicitud de amparo por parte del señor Ramón Antonio Romano, Walter Fabián Romero se presentó por ante este Juzgado de Paz, solicitando una audiencia con el suscripto, lo que sucedió inmediatamente después. Iniciada la charla, y entre otras expresiones manifestó que, en un lote de su propiedad, que posee desde siempre, días pasado, Ramón Antonio Romano, había realizado un acto en el alambrado del frente del lote. Hoy objeto de autos. Preguntado el señor Walter Fabián Romero, sobre si "el intruso" había modificado algo y/o se mantenía en la actitud, respondió que, no. Lo que llevó a que en otras palabras o, en estas mismas, le dijera: "no cabe intervención alguna de nuestra parte, ya que, de interponer un amparo a la simple tenencia no se le haría lugar en razón de no haber un hecho que altere el lote, tampoco la permanencia de alguien en el lugar de la supuesta Turbación”.*

Entiendo que el Sr. Juez de Paz, realizó un análisis preliminar de admisibilidad de la acción requerida por mi mandante, a lo cual, tras un breve análisis, descartó su procedencia, sin realizar ningún tipo de actuación, más allá de la entrevista referida.

Mención aparte merece el entrecomillado de la palabra “intruso” en la resolución: “*Preguntado el señor Walter Fabián Romero, sobre si “el intruso” había modificado algo y/o se mantenía en la actitud, respondió que, no*”, lo que resultaría denotativo de la subestimación de los dichos del Sr. Romero. En otras palabras, el funcionario actuante jamás creyó en su versión.

Sobre esta cuestión, según los dichos de mi mandante, el Sr. Romano ingresó con su tractor y el arado por el acceso de la propiedad de la Familia Romero. Cuando este último regresó y se enteró de lo sucedido, concurrió al Juzgado de Paz de Simoca, a los fines de interponer un amparo a la simple tenencia, en contra del hoy actor. Allí, efectivamente fue atendido por el funcionario y al contarle lo sucedido, se le preguntó si el Sr. Romano estaba actualmente en el lote, a lo que mi asistido le dijo que no. Allí se dictaminó, que no correspondía presentar un amparo a la simple tenencia, en razón de que el Sr. Romano no se encontraba en ese momento en el terreno, recomendándole al hoy demandado, que cuidara la posesión. Esta manifestación, también obra en el acta de la inspección ocular.

Con sorpresa, mi asistido recibió posteriormente, la notificación de la acción intentada en su contra, cuando fue el quien, en primer término, recurrió en calidad de denunciante ante el Juez de Paz, sin que se iniciara investigación alguna por sus dichos y si por los del actor.

Esto lo relatado por el Sr. Romero. Entiendo que, de estas circunstancias, hubiera sido esperable una mínima averiguación por parte del juzgador, considerando que el conflicto, ventilado posteriormente por el actor, era el mismo que había denunciado antes mi asistido.

Considero entonces que, así planteadas las cosas, existió una clara desigualdad procesal o, lo que es lo mismo, falta de igualdad de armas entre las partes, puesto que a mi asistido se le habría recomendado “*cuidar la posesión*”, mientras que la denuncia del Sr. Romano, derivó en un expediente judicial y una

sentencia en contra de mi mandante.

c.- Otra cuestión relevante, es la tramitación de la prueba en el procedimiento impugnado.

En fecha 05/12/2023, se realizó en el inmueble en cuestión, las medidas tendientes a establecer quién fue el último detentador público y pacífico del lote. En la inspección ocular prevista en ley aplicable, se determinó que el terreno estaba arado en la cabecera y costados. Respecto del resto del terreno, estaba sembrado con maíz y por manifestación del Sr. Walter Romero, quien aró el terreno fue el Sr. Ramón Antonio Romano, quien ingresó en su ausencia y sin su consentimiento. Todo ello obra en el acta de inspección ocular.

Ahora bien: Tal como surge de la sentencia emitida por Juzgado de Paz, se observaron en el lote, restos de raíces de caña de antigua data y restos de raíces de maíz. Esto demuestra a las claras, que el terreno no estaba sembrado con caña de azúcar, como sostiene el Sr. Romano, sino con maíz, que la familia Romero siembra para su sustento y para la venta. Esta actividad es de público y notorio en el vecindario.

Sin embargo, la interpretación del Sr. Juez de Paz es opuesta a esta tesitura: *“Que, de la inspección ocular a entender del suscripto, surge acabadamente el lote recientemente (a la fecha de inspección) estuvo sembrado con caña de azúcar. El rastrojo existente en gran cantidad evidenciaba un anterior cultivo de caña de azúcar. Considero, el rastrojo disperso sobre todo el suelo del lote objeto no correspondía a un cultivo de hace unos cuatro o más años atrás, según expresión de Walter Fabián Romero en foja 6. Conforme averiguación formulada a un cañero, cuando verdaderamente se cambia de cultivo el nuevo tratamiento del suelo, retira todo lo anterior, sino saldrían plantas diversas y entreveradas. Por lo visto, tampoco, creo desarrollaran tareas en un cañaveral atravesando con diversas maquinarias al lote en cuestión, desde casa de Walter*

Fabián Romero. Si es así, sería con tránsito absurdo y dificultoso, ya que se observaron algunos obstáculos como pueden verse en fotografías a fs. 74/75 ¿No es más fácil ingresar al lote por su frente solo destrabando un alambrado, como me comentó el señor Ramón Romano, él lo hacía? A los fines de estas consideraciones, obsérvense plantas entre ambos lotes en fotos agregadas a en donde se evidencia un suelo no pisado recurrentemente. No hay huella entre los lotes (casa de Walter Romero y lote objeto)”.

De la simple lectura del voto aludido, se desprenden **conclusiones opuestas a las de esta parte, basadas en meras conjeturas o deducciones, sin valerse de elementos probatorios indubitables**, lo que no puede aceptarse en un acto jurisdiccional.

En primer lugar, es fundamental destacar la falta de informe pericial especializado en la materia específica observada en la inspección ocular realizada. La valoración de la evidencia, requiere conocimientos técnicos y especializados en agronomía, particularmente en el cultivo de caña de azúcar. La ausencia de un perito con la debida acreditación y experiencia en esta área, socava la credibilidad y validez de las conclusiones alcanzadas en los considerandos de la resolución.

En segundo lugar, el Sr. Juez de Paz elaboró conclusiones propias, sin poseer los conocimientos técnicos necesarios para evaluar adecuadamente el estado del cultivo y las condiciones del suelo. La determinación del tiempo transcurrido desde el último cultivo de caña de azúcar y la identificación de prácticas agrícolas específicas, requieren una formación y experiencia que exceden las capacidades de un observador sin dicha formación. **La falta de estos conocimientos técnicos especializados invalida las conclusiones derivadas de la inspección ocular, ya que se basan en apreciaciones subjetivas y no en criterios científicos.**

Asimismo, **la referencia a un "cañero" indefinido, como fuente de información adicional, carece de determinación específica y precisión. No se ha identificado adecuadamente a este individuo ni se ha acreditado su competencia técnica para emitir juicios sobre las prácticas agrícolas pertinentes al caso.** Esta omisión constituye una deficiencia probatoria significativa, ya que las afirmaciones sobre el manejo del cultivo y las prácticas de cambio de suelo no están respaldadas por testimonios o informes de expertos reconocidos en la materia.

Además, la inspección ocular y las observaciones derivadas de la misma no están fundamentadas en una metodología científica ni en principios técnicos reconocidos. La interpretación de la existencia de rastrojos y la ausencia de huellas entre los lotes se basa en inferencias que carecen de soporte empírico y técnico. Este tipo de razonamientos, sin el respaldo de una pericia adecuada, no pueden ser considerados como prueba suficiente en un acto jurisdiccional, dado que no cumplen con los estándares de objetividad y veracidad exigidos por el ordenamiento jurídico.

En conclusión, **la falta de pericia especializada, la ausencia de conocimientos técnicos por parte del juzgador al momento de fundar su sentencia, así como la indeterminación del cañero mencionado como fuente válida de información, constituyen deficiencias insalvables en la valoración probatoria.** Estas falencias implican que las conclusiones del voto aludido se basan en conjeturas y deducciones carentes de fundamento técnico y probatorio, lo cual resulta inaceptable en el marco de un proceso jurisdiccional que debe guiarse por principios de certeza, imparcialidad y rigor científico.

d.- Superada esta cuestión, debo mencionar que, además de la opinión subjetiva e interpretación parcializada de la inspección ocular, **se tuvo en**

cuenta únicamente, el testimonio de personas comprendidas en las generales de la ley (las cuales, obviamente, depusieron a favor del actor), descartando testimonios de otros vecinos que viven en el lugar de los hechos, los cuales habrían dado luz sobre la realidad de la situación fáctica que se trata.

En efecto, se ponderó en los considerandos: *“Que, los únicos testigos encontrados y con disposición a informar Ivana Robledo, Javier Orellana y Ubaldo Jesús Racedo, todos son coincidentes en informar que el lote en cuestión estaba en poder de Ramón Romano. Que, nunca lo tuvo Walter Fabián Romero”*. Respecto de otros testigos, mencionó el sentenciante: *“Que, cabe mencionarse la Inspección ocular, en muchos casos podría ser la única prueba, ya que no siempre se cuenta con vecinos testigos. O como en este caso, que, extrañamente los muchos vecinos intentados consultar, no quisieron aportar datos ¿Por qué? ¡Nos extrañó! Llamó nuestra atención...”*

Si hubo dificultades para que los vecinos presten testimonio, ¿De dónde surgieron los testigos que declararon? La respuesta es clara: Fueron propuestos por el actor, en cuanto ellos iban a declarar a favor de su posición jurídica.

En efecto, respecto al **Sr. Ubaldo Jesús Racedo**, el mismo es **cuñado del actor**, puesto que su hermana está casada con el **Sr. Ramón Antonio Romano** y no vive cerca del lugar de los hechos.

En relación al **Sr. Javier Orellana**, el mismo es **puestero y empleado del Sr. Ubaldo Jesús Racedo**, es decir, que tiene una relación de subordinación con el este último, quien declaró a favor del actor.

Por lo demás, se consideró también la declaración de **la Sra. Ivana Robledo**, quien es la esposa del **Sr. Orellana**. Estas dos últimas personas, tienen una clara situación de dependencia económica con el **Sr. Racedo**, pariente del actor.

Estas circunstancias, tiñen de parcialidad el testimonio brindando en el expediente, por encontrarse relacionados por parentesco (en el caso de Racedo), o bien por dependencia económica de manera directa o indirecta (en el caso de Orellana y Robledo).

Es evidente que, al momento del interrogatorio, el Sr. Juez de Paz debía preguntar a los testigos, si les comprendían las generales de la ley, para así determinar si el testigo es imparcial o no está condicionado, de manera que pueda intervenir en el proceso y así salvaguardar los derechos de mi asistido. Ello no se hizo, lo que genera un vicio de extrema gravedad en el procedimiento.

En conclusión, los testimonios fueron brindados en la causa, por personas comprendidas en las generales de la ley, que brindaron su declaración con la clara intención de favorecer al actor, es decir, son testigos complacientes, violando su deber de imparcialidad y de decir verdad.

Además de ello, sus declaraciones no son contextualizadas, profundas y descriptivas de los hechos, en cuanto no expresaron las circunstancias de tiempo, modo, lugar, sin dar razón de sus dichos o expresar cómo conocieron sobre los hechos sobre los que testificaron, por lo que son insustanciales y no deben ser tenidos en cuenta para resolver la causa.

También, debe considerarse que no presenciaron de manera directa los hechos que dicen conocer, puesto que los relataron a partir de lo contado por el actor, es decir, que no percibieron estos hechos de manera directa y a través de sus sentidos. Al ser testigo de oídas, deben ser desechados.

e.- Por otro lado, debo mencionar que, de acuerdo a lo relatado por mi mandante, **si existían vecinos del lugar que quisieron testificar sobre los hechos acontecidos, pero que fueron desechados por el funcionario actuante.** Se trata de la Sra. Ivana del Valle Antoni, quien vive y reside hace más de 20 años en la zona del lugar de los hechos, así como la Sra. Analía Clemencia

Martínez, quien vive y reside cerca del lugar de los hechos hace más de 30 años, las que fueron consultadas sobre el particular, según lo expresa el Sr. Romero, pero cuyos testimonios no fueron considerados al momento de resolver la causa.

En este sentido, es importante destacar que, conforme al principio de inmediación que rige el proceso judicial, el juez debe valorar directamente la prueba testimonial, máxime cuando los testigos propuestos cuentan con un conocimiento directo y prolongado de los hechos, lo que otorga veracidad y relevancia a sus declaraciones.

La Sra. Antoni y la Sra. Martínez manifestaron que el único que cuida y mantiene el lote en cuestión es Walter Romero y Lauro Romero. Sin embargo, la falta de consideración de sus testimonios bajo el argumento de que no resultaban conducentes para la resolución de la causa, constituye una violación al derecho a la prueba y a la debida diligencia procesal.

Además, desde una perspectiva constitucional, el artículo 18 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de defensa en juicio, lo que implica la posibilidad de ofrecer y producir toda prueba conducente para la defensa de los derechos en juego. La exclusión de los testimonios de las Sras. Antoni y Martínez sin una justificación suficiente y razonada vulnera este derecho, afectando la integridad del proceso y la posibilidad de que el tribunal pueda contar con todos los elementos necesarios para una correcta valoración de los hechos.

Acompaño informe actuarial de los testigos nombrados, elaborado por el Dr. Jacinto Naranjo, actuario de esta Defensoría Oficial, en el cual se constata la relevancia y la pertinencia de los testimonios ofrecidos. Pido se tenga presente.

f.- La agregación de prueba documental extemporánea

Finalmente, a pesar de que no se hace de ello ninguna consideración en la sentencia, se incorporó, a pesar de la oposición formulada por esta parte en ocasión de la inspección ocular, documentación aportada por la actora, que considero que fue presentada extemporáneamente. A pesar de ello, sin rechazar el planteo formulado por el Dr. Naranjo, fueron agregadas a estos autos.

En este sentido, al momento de interponer la solicitud de amparo a la simple tenencia (acta de fecha 08/11/2023), no fue agregada ni acompañó el actor, ninguna documentación relativa a su reclamo.

Sin embargo, en la inspección realizada en 05/12/2023, el Sr. Romano acompañó documental en 48 fs., a los que el secretario de esta Defensoría Oficial se opuso de manera expresa (acta de fs. 6/8). Sin perjuicio de ello y sin resolución expresa (denegatoria al planteo formulado por esta parte), se agregó dicha documentación (fs. 9/25).

Ante ello, el Sr. Juez de Paz decidió elevar en consulta el expediente, a los fines de tratar la oposición formulada por esta parte, a lo que V. S resolvió en 06/02/2024, rechazar el planteo por improcedente. En dicha ocasión, el Sr. Juez de Paz solicitó “opinión” u “opiniones” sobre la cuestión planteada, lo que también fue denegado por el órgano jurisdiccional (cf. art. 40 ley 4815).

Como puede verse, la incorporación de la documentación de forma extemporánea y más aún, la resolución de la sentencia de fondo sin haber sustanciado y proveído esta incidencia, no puede más que generar la nulidad de la resolución aludida.

Es menester destacar que el principio de preclusión es uno de los pilares fundamentales del derecho procesal, diseñado para asegurar la eficiencia y justicia en el desarrollo de los procesos judiciales. Dentro de este contexto, los plazos para la presentación de pruebas instrumentales, adquiere una relevancia

crítica para garantizar un proceso equitativo para todas las partes involucradas.

En efecto, el plazo para la incorporación de prueba instrumental debe ser considerado como perentorio y preclusivo. Esto significa que, una vez vencido dicho plazo, se pierde automáticamente la facultad procesal para realizar dicha acción. La finalidad de este plazo es evitar la dilación y asegurar la celeridad del proceso judicial, principios esenciales del derecho procesal.

El principio de preclusión asegura que cada etapa procesal se desarrolle dentro de un marco temporal específico, impidiendo así que las partes perpetúen el litigio indefinidamente. La preclusión, al imponer un límite temporal rígido para ciertas actuaciones, como la incorporación de pruebas documentales, fortalece la seguridad jurídica y la previsibilidad del proceso.

Una de las principales razones para exigir la incorporación inicial de toda la prueba documental es prevenir las sorpresas procesales. Esta exigencia busca evitar que una de las partes se vea en desventaja debido a la presentación tardía de documentos determinantes para su defensa. Al asegurar que todas las pruebas documentales sean presentadas oportunamente, se promueve la equidad y la transparencia en el proceso judicial.

Además, la lealtad en el debate judicial se refuerza mediante la preclusión y el carácter perentorio de los plazos. La presentación temprana y completa de la prueba documental permite que ambas partes conozcan los elementos de prueba disponibles, facilitando una defensa adecuada y justa. Este enfoque contribuye a que el debate judicial se desarrolle en un contexto de transparencia y honestidad.

Por lo tanto, la incorporación extemporánea de documentación en este proceso no solo contraviene el principio de preclusión, sino que también afecta la equidad y la transparencia del proceso judicial.

4.- La arbitrariedad manifiesta en el razonamiento judicial

Llegados a este punto, corresponde abordar un eje central del planteo de nulidad, consistente en la arbitrariedad manifiesta, susceptible de descalificar el acto jurisdiccional (arbitrariedad en el razonamiento legal), incurrida por el Sr. Juez de Paz, al momento de fundamentar su decisión, a través de una interpretación subjetiva de los hechos, violentando el deber de imparcialidad.

En este sentido, corresponde citar la parte pertinente de los considerandos: *“Que, volviendo unos días atrás, posterior al 8/11/2023 (fecha de denuncia y solicitud de amparo), el 15/11/2023, nuevamente recurrió Walter Fabián Romero, pero esta vez en compañía de su señora madre. En esa segunda oportunidad y en conversación con ambos, me hicieron pensar a que en la primera conversación mantenida con Walter se había tergiversado la verdad. La verdad, y dicha de una forma era que Ramón Antonio Romano, es persona con buen pasar económico. “Él puede prescindir del bien”. El denunciado en autos y su madre, indudablemente piensan que es más justo el lote en cuestión quede en manos del más vulnerable o necesitado. ¿Conjeturo? Tal vez, a decir verdad. No puedo dejar de sospechar una verdad de hechos conforme a la entrevista mantenida en la segunda ocasión.*

Que, en el espíritu de esta ley, lo más importante no es el bien. No es lo que prima, ya que sobre lo material queda la judicialización, si es interés de las partes, sino velar por la paz social. Evitar la confrontación sin ninguna Intervención ajustada a derecho o, de razón...”

He hecho referencia con anterioridad, a que las conclusiones a las que arriba el juzgador, respecto a la inspección ocular, se basan en meras conjeturas o deducciones, sin valerse de elementos probatorios indubitables, lo que no puede aceptarse en un acto jurisdiccional. Lo consignado en los considerandos citados en este punto, son una ampliación de dicha parcialidad, puesto que las reflexiones del Sr. Juez de Paz, no pasan de ser preconceptos y

opiniones personales del funcionario, pero de ninguna manera se apoyan en constancias del expediente.

En efecto, del razonamiento lógico planteado por el sentenciante en la parte transcripta, surge la verdadera razón de su fallo. Al parecer, cree entender el funcionario, las razones implícitas, internas y psicológicas del demandado, así como los fundamentos o motivaciones supuestas que explicarían la conducta del Sr. Romero: Que el Sr. Romano es rico y, por lo tanto, no necesitaría el bien, como si lo necesita mi mandante, lo que justificaría el accionar turbatorio del demandado. Ello no es real y solo surge de la imaginación del órgano jurisdiccional.

Tal como lo reconoce el Sr. Juez de Paz, **esto no pasa de ser una conjetura, basada en un prejuicio de clase** (*“...Ramón Antonio Romano, es persona con buen pasar económico. “Él puede prescindir del bien”. El denunciado en autos y su madre, indudablemente piensan que es más justo el lote en cuestión quede en manos del más vulnerable o necesitado. ¿Conjeturo? Tal vez, a decir verdad...”*). Si ello no fuera así, ¿cómo concluye el funcionario sobre lo que supuestamente piensa el Sr. Romero?

Por lo demás, el sentenciante deja traslucir su razonamiento interno, al expresar que **basa su decisión, en “sospechas” y o en certezas, como debería esperarse de un acto jurisdiccional** (*“...No puedo dejar de sospechar una verdad de hechos conforme a la entrevista mantenida en la segunda ocasión...”*).

Considero que las reflexiones sobre el sentido profundo de la norma que rige al amparo a la simple tenencia, aún con coincidencia parcial, no son relevantes para la resolución de la causa, y aparecen en la argumentación, como una forma de justificar la arbitraria decisión: *“... Que, en el espíritu de esta ley, lo más importante no es el bien. No es lo que prima, ya que sobre lo material queda la judicialización, si es interés de las partes, sino velar por la paz social. Evitar la*

confrontación sin ninguna Intervención ajustada a derecho o, de razón...” Al parecer, el Sr. Juez de Paz, considera que la “paz social”, se mantiene mediante la orden de lanzamiento en un plazo de 48 hs., cuando este tipo de solución, cuando hay claras dudas acerca de la verdad material, sería mantener la situación fáctica, hasta que se cuente con mayores elementos probatorios en un proceso de otra amplitud y conocimiento.

En otras palabras, si el Sr. Juez de Paz no estaba seguro (el mismo manifiesta que tiene “sospechas” de que lo expresado por mi mandante no es cierto), ¿por qué dispuso el lanzamiento? ¿No hubiera sido mejor esperar un proceso más amplio para establecer la verdad material? ¿Se mantiene la paz social mediante el lanzamiento de vecinos?

La doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa. Además, incorpora al catálogo de sentencias arbitrarias aquellas que no constituyen derivación razonada del derecho aplicable con referencia a las circunstancias de la causa, cuando su fundamentación se exhibe como una reflexión dogmática o personal. Como lo he afirmado y surge del propio tenor de los considerandos, el razonamiento del Sr. Juez de Paz se basa en meras opiniones ideológicas y subjetivas y, por lo tanto, carente de la argumentación que debe contener un acto jurisdiccional para ser considerado válido.

Dicho ello, considero que la decisión impugnada, presenta serias deficiencias en cuanto a su motivación, a la vez que luce contradictoria en sí misma, y se sustenta en fundamentos subjetivos del funcionario actuante.

De la atenta lectura de la resolución, surge que el único elemento probatorio del que echa mano el juzgador, es la declaración testimonial de personas cuya parcialidad es evidente, puesto que ha desechado testimonios

de vecinos del lugar y ha interpretado de manera subjetiva y tendenciosa lo observado en la inspección ocular, tal como desarrollé ut supra.

En este sentido, en relación a los defectos en la fundamentación de la decisión, debo señalar que la motivación de una decisión consiste en un discurso justificativo, en la expresión pública de las razones que sostienen una decisión judicial. Sobre el particular, se ha sostenido que *“... la motivación de la sentencia constituye el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho, en los cuales el juez apoya su decisión en salvaguarda de la garantía de defensa en juicio ... La actuación del poder concedido a los jueces, fundamentalmente a través de la sentencia, resultará legítima en tanto quede plasmada la racionalidad que guio su desarrollo, desde las premisas hasta la resolución final. De esa manera no se presentará como fruto de la arbitrariedad ...”* (cfr. Marina Gascón Avellán, “Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba”, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, Madrid, 2004, 2ª edición, ps. 189 y sgtes., citado en Acuerdo N° 5/10 “Giri”, del registro mencionado).

Sabido es que, en todo estado democrático, la motivación de las decisiones judiciales posee una acentuada preeminencia por resultar un acto público, en tanto deriva del ejercicio de un poder público. Así la justificación que se brinde de tal resolución permitirá fiscalizar, por parte de los interesados, las razones que sustentan lo allí decidido. A su vez, la motivación constituye una garantía que tiende a asegurar el derecho de defensa en juicio y debido proceso de la ciudadanía. La justificación posibilita a los justiciables el ejercicio de las vías de impugnación, cuando no se conforman con las razones aportadas por quien toma la decisión. El resultado final, a la luz del deber de motivar, no implica verdad del juicio, sino la exposición clara y concreta de su fundamento.

Para finalizar, corresponde precisar que la primera de todas las garantías del proceso es la imparcialidad de quien juzga. Puede afirmarse que no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en

una posición de imparcialidad como tercero ajeno a los intereses en litigio. Es por eso que el juez ha de ser, y ha de aparecer, como alguien que no tenga respecto a la cuestión sobre la que ha de resolver y en cuanto a las personas interesadas en ella, ninguna relación que pueda enturbiar su imparcialidad.

En conclusión, la falta de fundamentación adecuada, la dependencia de conjeturas y prejuicios, y la ausencia de un razonamiento lógico y justificado en la sentencia del Sr. Juez de Paz, demuestran una clara violación de los principios de debido proceso y defensa en juicio, constituyendo un acto jurisdiccional arbitrario que debe ser descalificado.

IV.- PRUEBA

Ofrezco en el carácter de prueba del planteo de nulidad incoado, la siguiente prueba:

DOCUMENTAL

a.- La totalidad de las constancias obrantes en la causa, especialmente acta de inspección ocular, declaración de testigos y resolución impugnada

b.- Informe actuarial relativo a los dichos de la Sra. Ivana del Valle Antoni y la Sra. Analía Clemencia Martínez, conforme declaración realizada en sede de este Ministerio Público, elaborado por el Dr. Jacinto Naranjo, actuario de esta Defensoría Oficial.

DOCUMENTACIÓN EN PODER DE TERCEROS

a.- Teniendo en cuenta lo manifestado acerca de la relación de parentesco entre el testigo de Ubaldo Jesús Racedo, con domicilio en Manuela Pedraza, con el actor, ofrezco en el carácter de prueba documental en poder de terceros, actas de nacimiento del Sr. Ubaldo Jesús Racedo, nacido el 27 de mayo del año 1968; acta de nacimiento de la Sra. María Eva Racedo, hermana del testigo (esposa del actor) y acta de matrimonio del Sr. Ramon Antonio Romano con la Sra. María Eva Racedo, celebrado en el año 1969 /1970.

A los fines de su producción, solicito se intime a las personas arriba mencionadas, a que en el plazo de 48 hs., adjunten la documentación referida, bajo apercibimiento de ley.

b.- Para el caso que ello no resulta posible, solicito **SE LIBRE OFICIO** al Juzgado de Paz de Simoca, a los fines que remitan las actas mencionadas.

TESTIMONIAL

a.- Solicito se cite a Ivana del Valle Antoni, DNI N° 39.078.920, y a la Sra. Analía Clemencia Martínez, DNI 23.859.018, vecinas del lugar, ambas con domicilio en Manuela Pedraza Depto. de Simoca, a los fines den ratificar o rectificar lo manifestado en el informe actuarial acompañado o bien depongan al cuestionario que las partes determinen en ocasión de la audiencia, por conocer, de manera cabal, la realidad de los hechos ventilados en la presente causa.

b.- Teniendo en cuenta la relación de subordinación y dependencia económica de los testigos Sr. Javier Orellana y a su esposa Ivana Robledo, ambos con domicilio en Manuela Pedraza, respecto del testigo Ubaldo Jesús Racedo (quien se sostiene, tiene una relación de parentesco con el actor), a los fines que se encuentran comprendidos en las generales de la ley, solicito se cite a los mismos, para ser entrevistados por las partes y respondan acerca de la

relación con las partes y los demás testigos, conforme cuestionario formalizado verbalmente por las partes, debiendo declarar con la verdad, haciéndole conocer que podrían ser pasibles de sanciones penales por **falso testimonio**.

Formulo expresa reserva de formular tachas de testigos por sus dichos y ofrecer prueba de la misma, en caso de no manifestar la realidad de los hechos los nombrados.

INSPECCIÓN OCULAR

Desde ya dejo ofrecido, salvo mejor criterio de V.S, la realización de una inspección ocular en el lugar de los hechos, a través de Secretaria Actuarial del Juzgado, teniendo en cuenta la naturaleza del presente planteo.

V.- PETITORIO

Por lo expuesto, a V.S. respetuosamente solicito:

1.- Tenga por deducido en legal tiempo y forma, incidente la nulidad de la resolución de fecha 30/04/2024.

2.- Se tenga por ofrecida la prueba y en su caso, se abra a prueba la presente incidencia, en los términos detallados en el capítulo IV de esta presentación.

3.- Se corra vista del presente incidente al Sr. Fiscal Civil, a los fines que se expida sobre el mismo.

4.- Oportunamente, se declare la nulidad absoluta de la resolución de fecha 30/04/2024.

5.- En su caso, se sustancie nuevamente el amparo a la simple

tenencia, conforme a la Ley 4815 art. 40 y que lo realice un Juez de Paz subrogante. JAN - CGP

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERÁ JUSTICIA